

Colina, dieciséis de agosto de dos mil diecinueve

VISTOS, CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

Primero: Pedro Ignacio Peña Sánchez, abogado, en calidad de mandatario judicial de don Francisco Javier Pérez Ormazabal, ambos domiciliados para estos efectos en Avenida Las Condes N° 11.380, oficina N° 91, comuna de Vitacura, Región Metropolitana deduce demanda en Procedimiento de Aplicación General Laboral por Nulidad del Despido, Despido Injustificado y Cobro de Prestaciones Laborales Adeudadas, en contra de la Ilustre Municipalidad De Lampa, Rol Único Tributario N° 69.071.400-0, cuyo representante legal es doña Graciela Ortuzar Novoa, Alcaldesa, ambos domiciliados para estos efectos en calle Baquedano n° 964, comuna de Lampa, Región Metropolitana.

Expone que su representado comenzó a prestar servicios para la demandada bajo subordinación y dependencia a partir del 1 de diciembre de 2017, mediante múltiples contratos de honorarios, desempeñándose durante todo el periodo laboral como “Arquitecto Revisor”, en la Dirección de Obras, además de realizar otras funciones que no eran propias de su cargo, con constantes aumentos de sus funciones y remuneraciones, evidentemente habituales, no accidentales y genéricos en la organización jerárquica de la Municipalidad de Lampa, sujeto a jornadas de trabajo claramente establecidas, al poder de mando de sus superiores y, a su vez, al deber de obediencia en el desempeño de sus funciones, hasta el momento del despido del que fue víctima, el día 04 de febrero de 2019. Según los contratos celebrados por el mandante, este prestó servicios en la Dirección de Obras Municipales obligándose a desarrollar, entre otras, las siguientes funciones: *revisión de expedientes de copropiedad, revisión de obras nuevas, complementarias, provisorias, y preliminares; revisión de obras en demolición, modificaciones de permiso en obras menores y anteproyectos, regularización catástrofe, Ley 20.898, 20.772 y Transito de DS.2, recepciones definitivas parciales de edificación, recepciones definitivas parciales de urbanización; garantías de urbanización, fusiones, subdivisiones loteos, cambios de destino, antenas, recepción de antenas; aprobación de áreas verdes, recepción de áreas verdes; realizar visitas de recepciones de edificación, urbanización y áreas verdes; realizar atención de público con citas programadas, contestar consultas de expedientes por correo, citas y/o reiteros; elaborar actas de observaciones, emitir reitero de observaciones; emitir certificados y actas de rechazo; realizar seguimiento de firma de documentación y de timbrado de planos EE.TT, certificados, memoria y otros; efectuar repartición de*



documentación final a los departamentos tanto en archivo, secretaria, mesón de atención, entre otras funciones extrañas a su cargo.

Indica que la Ilustre Municipalidad de Lampa constituye una corporación autónoma de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comuna de Lampa y que el contrato celebrado con la demandada constituye una abierta infracción a la legislación aplicable, pues corresponde a aquellos denominados “Contrato de Honorarios”, a los que corresponde imputarles, bajo el principio de la supremacía de la realidad, la calidad de una efectiva relación laboral sujeta al vínculo de subordinación y dependencia, durante más de 1 año.

Precisa que el mandante nunca fue contratado como funcionario municipal en ninguna de sus categorías, conforme lo dispuesto por la Ley N° 18.883 sobre Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, debido a que no ingresó a prestar servicios en la forma que dicha normativa especial prevé, ni en las condiciones que esa normativa establece: planta; contrata; suplente. Siendo persona natural, su representado tampoco estuvo sometido a un estatuto especial de aquellos que aplican en el Municipio, sino que se le contrató bajo la norma del artículo 4 de la Ley N° 18.883, esto es, aquella que permite la contratación sobre la base de honorarios a profesionales y técnicos de educación superior o expertos en determinadas materias, que establece determinadas exigencias adicionales, cuales son: a) Que tales materias no sean las habituales de la municipalidad; b) Que se trate de cometidos específicos; c) Que sean transitorios y temporales. Sin embargo, las labores prestadas por su representado jamás fueron no habituales de la Municipalidad, tampoco se trató de cometidos específicos, ni mucho menos transitorios y temporales, puesto que la relación con la ex empleadora se llevó a cabo fuera del marco legal que establece el artículo 4 de la Ley N° 18.883, siendo aplicable en este caso la norma común y general en Derecho Laboral, y el Código del Trabajo en toda su extensión.

Así pues, lo ha declarado la Excelentísima Corte Suprema de Justicia en Sentencia de Reemplazo del Recurso de Unificación de Jurisprudencia, Rol 11.584-2014, de fecha 01 de abril del año 2015, caratulado “Juan Pablo Vial con Municipalidad de Santiago” (Considerando Octavo). Y la situación fáctica del anterior fallo es equivalente a la relación laboral que vinculó a su representado con la Ilustre Municipalidad de Lampa, desde el momento en que los servicios se extendieron por más de 1 año, realizando los mismos servicios bajo las características esenciales propias de un contrato de trabajo, en cometidos genéricos, permanentes en el tiempo y desplegados de forma ininterrumpida.



Puntualiza que el día 04 de febrero 2019, la Municipalidad de Lampa despidió a su representado de manera irregular y faltando a todo requisito legal, puesto que no señaló con exactitud y claridad los hechos ni las causales por el cual dio término a la relación laboral, no indicó ninguna causal legal de las contenidas en el Código del Trabajo, infringiendo flagrantemente el artículo 162 inciso primero del citado cuerpo legal, tampoco acreditó los pagos previsionales de todo el período de la relación laboral, entre otras irregularidades. En efecto, el día 04 de febrero de 2019, su mandante fue informado por parte de doña Alejandra Calderón, Alcaldesa Subrogante, que su contratación no será renovada y por tanto prescindirán de sus servicios desde ese momento, razón por la cual, conforme señala el artículo 168 inciso primero, el despido debe entenderse realizado “sin invocación de causa legal”, y por tal razón debe condenarse a la empleadora al pago de las indemnizaciones contempladas en el artículo 162 inciso cuarto y 163 inciso dos, más el recargo del artículo 168 inciso primero letra b), todas normas del Código del Trabajo.

A continuación, analiza una serie de diferencias que existirían entre un contrato de trabajo y uno a honorarios, a fin de explicar que la demandada no consideró al momento de celebrar los contratos de honorarios con su representado, el estatuto jurídico idóneo, puesto que, a su entender, la relación entre el mandante y el municipio constituyó un contrato de trabajo y, por ende, se alejaron claramente de lo que contempla un contrato de honorarios.

Agrega que su representado prestó servicios a favor de la Municipalidad de Lampa como Arquitecto Revisor de la Dirección de Obras, cargo bajo el cual desplegó numerosas labores y funciones conforme al principio de supremacía de la realidad, a saber: *revisión de expedientes de copropiedad, revisión de obras nuevas, complementarias, provisorias, y preliminares; revisión de obras en demolición, modificaciones de permiso en obras menores y anteproyectos, regularización catástrofe, Ley 20.898, 20.772 y Transito de DS.2, recepciones definitivas parciales de edificación, recepciones definitivas parciales de urbanización; garantías de urbanización, fusiones, subdivisiones loteos, cambios de destino, antenas, recepción de antenas; aprobación de áreas verdes, recepción de áreas verdes; realizar visitas de recepciones de edificación, urbanización y áreas verdes; realizar atención de público con citas programadas, contestar consultas de expedientes por correo, citas y/o reiteras; elaborar actas de observaciones, emitir reitero de observaciones; emitir certificados y actas de rechazo; realizar seguimiento de firma de documentación y de timbrado de planos EE.TT, certificados, memoria y otros; efectuar repartición de documentación final a los departamentos tanto en archivo, secretaria, mesón de*



atención; realizar despacho y filtro de expedientes; elaborar de documentos, resoluciones, rectificaciones, aclaraciones, oficios y respuestas por cambio de profesional; entre otras extrañas a su cargo; lo que implicó un cargo que figuró como habitual de la institución, y que conforme a ello no pudo adoptar la forma de un contrato de arrendamiento de obra material ni de servicios

Asimismo, afirma que su mandante prestó servicios a favor de la Municipalidad de Lampa durante más de 1 año, 2 meses y 3 días de forma constante en las dependencias de la Municipalidad, en calle Balmaceda N° 776, comuna de Lampa, Región Metropolitana, sujeto a una jornada de trabajo distribuida de lunes a miércoles de 08:30 hasta 18.00 horas, días jueves de 8:30 hasta las 16:30 y viernes de 8:30 hasta 14:00 horas, con una hora de colación, a las instrucciones por parte de su ex Jefe Directo doña Paula Collao, en calidad de Directora de Obras de la Municipalidad de Lampa, y en un contexto de permanencia y en funciones propias de la institución, como son las mencionadas en la ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, además de otras funciones extrañas a su cargo, como realizar el aseo e higiene de la oficina y baño; coordinar al equipo de revisores de la dirección de obras; realizar atención de público masivo en la municipalidad; realizar contingencia en mesón de atención de público de la dirección; realizar la coordinación con distintas direcciones municipales; coordinación con arquitectos revisores para asignar expedientes; controlar tiempos de atrasos en la revisión de expedientes; realizar suplencia de la directora en reuniones de comité técnico; participar en campaña electoral repartiendo volantes, entre otras; reconociéndosele que tenía derecho a: permiso administrativo, licencia médica, feriado legal, aguinaldos, capacitaciones, viáticos, entre otros, bajo la contraprestación directa del Departamento de Finanzas, por montos equivalentes y mensuales durante toda la vigencia de la relación laboral, ascendente a \$1.039.300.-, pese a que, en la práctica su representado emitió boletas de honorarios a nombre de la Municipalidad de Lampa, los cuales se pagaban previa confección de un Informe Mensual de Gestión, que se adjuntaba a la boleta emitida a nombre la ex empleadora y del cual el municipio guarda registro, evaluación mensual que es indicio de subordinación, pues debe rendir cuentas a su jefatura directa.

Hace hincapié en que el elemento de la continuidad es el que permite comprobar que las supuestas contrataciones a honorarios no eran tales, puesto que se opone a uno de los aspectos que configura el contrato de honorarios que establece el artículo 4 de la Ley N° 18.883, al ser absolutamente contraria al aspecto temporal y específico que admite este tipo de contrataciones, lo que



encuentra su comprobación en las sucesivas boletas de honorarios, emitidas por su representado a favor de la Municipalidad de Lampa por más de 1 año, teniendo el carácter de mensuales y por montos equivalentes, los cuales fueron progresivamente en aumento.

En razón de lo anterior, estima que la demandada incumplió los deberes señalados en los incisos 5° y 6° del artículo 162° ya citado, por lo que reclama la aplicación de la denominada “Ley Bustos”, desde que la omisión en las formalidades en el envío y contenido de la Carta de Término de los Servicios o Carta de Despido en que incurrió la empleadora, habrían vulnerado la disposición normativa de los incisos 1° y 5° del artículo 162° del Código del Trabajo, toda vez que no indicó por escrito cuáles fueron los fundamentos de hecho y de derecho para tomar la drástica decisión de desvincular a su representado, con lo cual, le ha dejado en la más completa indefensión, otorgándole al despido, por esa sola omisión, la categoría de despido injustificado.

Añade que la ex empleadora adeuda a su representado, cotizaciones de seguridad social correspondientes a cotizaciones previsionales del Fondo de Pensiones, Fondo de Salud y del Fondo de Cesantía, por todo el período trabajado entre el día 01 de diciembre de 2017 hasta el 04 de febrero del año 2019, por lo que corresponde que sea declarada la deuda de dichas cotizaciones y condenarla a su pago, para lo cual se debe ordenar oficiar a las entidades previsionales respectivas a objeto que inicien los trámites de cobranza judicial, además de aplicar la sanción de nulidad del despido, puesto que actualmente se encuentra en mora de pagar las cotizaciones previsionales.

En consecuencia, estima que la contratación de su representado se realizó infringiendo el artículo 7° de la Constitución Política de la República, ya que el Municipio celebró con éste pseudos contratos a honorarios, no teniendo autoridad ni derecho conferido por ninguna ley donde expresamente se le haya otorgado la facultad para ello, puesto que dicha contratación en realidad se trató de un vínculo de carácter laboral, no siendo procedente en este caso particular la contratación a honorarios, a un trabajador al cual se le asignaran funciones habituales, permanentes y generales del municipio, máxime cuando la Municipalidad tenía la facultad para contratar a su representado bajo las normas del Código del Trabajo, y, además la facultad para contratarlo bajo la norma del artículo 4° de la Ley N° 18.883, optando por celebrar con éste, pseudos contratos de honorarios, cuando en la práctica la relación sostenida con la ex empleadora se desarrolló bajo un vínculo de subordinación y dependencia, siendo este tipo de vínculo propios y exclusivos de un contrato de trabajo.



Argumenta además que siendo los derechos establecidos por las leyes laborales irrenunciables, mientras subsista el contrato de trabajo, no resulta procedente aplicar la teoría de los actos propios para el caso de marras, toda vez que operaría contra el trabajador la circunstancia de que hubiera consentido en la contratación a honorarios, sin protesta alguna durante toda la prestación de servicios.

Finalmente, luego de citar jurisprudencia atinente al caso, solicita se acoja la demanda interpuesta y se declare la existencia de relación laboral y la continuidad de los servicios entre el día 01 de diciembre 2017 hasta el 04 de febrero del año 2019, bajo las características que se derivan de la definición de contrato de trabajo consignada en el artículo 7° del Código del Trabajo; y con motivo del despido ilegal y arbitrario del que fue víctima su representado, se condene a la demandada al pago de los siguientes conceptos: la sustitutiva de aviso previo por la siguiente cantidad: \$1.039.300.- pesos, la indemnización por años de servicios correspondientes a 1 año, por \$1.039.300.- pesos, el recargo del 50% de las indemnizaciones por años de servicio ascendentes a \$519.650.- pesos, Feriado legal \$ 727.503 equivalente a 21 días (1 año), Feriado proporcional: \$82.904.- pesos, equivalentes a 2,62 días (2 meses y 3 días); más Cotizaciones impagas durante todo el periodo que duró la relación laboral, según liquidación que practique el Tribunal y las que deriven de la aplicación de los incisos 5° y 7° del artículo 162° del Código del Trabajo, denominada “Ley Bustos”, según liquidación a practicar.

Segundo: Jorge Ignacio Gárate Bais, abogado, en representación de la Ilustre Municipalidad De Lampa, ambos con domicilio en calle Baquedano N° 964, comuna de Lampa, contesta la demanda, interpuesta en contra de mi representada por don Francisco Javier Pérez Ormazábal, solicitando desde ya su rechazo en todas sus partes, con expresa con costas.

Explica que entre el Municipio y la demandante, existió una sucesión de contratos a honorarios de carácter civil, donde el cometido específico era “Arquitecto revisor de la Dirección de Obras”, y el honorario bruto del demandante ascendía a la suma de \$1.039.300.-

Agrega que la Municipalidad de Lampa está regida por disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que son claras en la forma de vincularse con los particulares. En este orden de ideas, tratándose de prestación de servicios, queda regida principalmente - tanto en su organización, como en su funcionamiento - por la Ley N° 18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, la cual fija los lineamientos principales en el ámbito de la contratación de personal.



Además, en lo pertinente, rige a su vez la Ley N° 18.575, sobre Bases Generales de Administración del Estado y la Ley N° 18.883, Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, siendo esta última la que regula las formas como una persona puede prestar servicios para una municipalidad, entre las cuales está la contratación de honorarios. De hecho, la Ley N° 18.883 habilita a las municipalidades a contratar a personas bajo la modalidad de contrato de trabajo, pero sólo en los casos de actividades que se efectúen en forma transitoria en balnearios u otros sectores turísticos o de recreación o en servicios públicos traspasados. Así, en los demás casos, dicha habilitación legal no existe, por lo que, si esta Municipalidad lo llevara a cabo, vulneraría lo dispuesto en el artículo 7° de la Constitución Política de la República, norma que contiene el Principio de Legalidad, base esencial de nuestro ordenamiento jurídico y que los órganos del Estado están obligados y no invitados a cumplir.

Añade que a lo anterior se suma la propia identificación de la relación contractual que rige entre las partes, denominada “Contratación sobre la base de honorarios”, que no alude a un vínculo laboral, máxime cuando la propia naturaleza de los cometidos encargados al demandante, y aceptados por él, permiten concluir que para cumplir con ellos no era necesario que se le impusieran órdenes, pues la naturaleza de los servicios le otorgaba libertad suficiente para desarrollarlos, debiendo sólo emitir informes que dieran cuenta del cumplimiento de los cometidos, la cual realizó regular y periódicamente, mes a mes, configurándose los elementos de la prestación de servicios de honorarios civiles, establecido en el Código Civil, particularmente las normas relativas al denominado “contrato de arrendamiento de servicios inmateriales” (artículos 2006 y siguientes), ya que éstas son las únicas que se ajustan con la materia de que tratan estos contratos a honorarios y no de una relación laboral como erróneamente lo pretende la contraria.

Luego de citar jurisprudencia relativa al caso, solicita que se rechace la existencia de una relación laboral, la existencia de un despido ilegal e injustificado, y menos la nulidad del mismo, toda vez no existe razón jurídica para establecer que entre las partes se estableció una relación laboral. Respecto al pago de cotizaciones previsionales en forma íntegra por el período trabajado, también solicita su total rechazo, dado que nunca se realizó algún tipo de descuento del honorario pagado a la demandante, el que recibió íntegramente tal como fue pactado.

En cuanto a la determinación del término de los servicios contratados, puntualiza que el último contrato de prestación de servicios a honorarios vigente tenía como fecha de expiración el 31 de enero de 2019, fecha en la cual, el



demandante lisa y llanamente dejó cumplir con los cometidos y servicios contratados, comunicándole el día 04 de febrero del año en curso, que no suscribirían un nuevo contrato bajo la modalidad de honorarios.

En consecuencia, solicita tener por contestada demanda y se la rechace en todas sus partes, con costas.

Tercero: Que de acuerdo a los argumentos expuestos y las peticiones formuladas en el libelo, la acción promovida corresponde a la declarativa de existencia de la relación laboral y de despido injustificado, conferida al trabajador que estime que el término de la relación laboral ha sido injustificada, indebida o improcedente, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 168 del Código del Trabajo, y tramitada de conformidad a las normas del procedimiento ordinario de aplicación general, previstas en los artículos 446 y siguientes del Código del Trabajo.

Cuarto: Que efectuado el llamado a conciliación, esta no prosperó por falta de acuerdo entre las partes.

Quinto: Que de conformidad con las presentaciones de las partes, se estableció como hecho no controvertido el siguiente: El demandante tenía una remuneración de \$1.039.300.

Sexto: Que de acuerdo al mérito de las acciones y defensas esgrimidas por las partes en sus escritos del período de discusión, la litis quedó configurada de modo tal que las partes debieron allegar al proceso las probanzas correspondientes, a fin de acreditar los siguientes hechos substanciales, pertinentes y controvertidos:

1. Efectividad de estar en presencia de una relación laboral en los términos que regula el artículo 7 del Código del Trabajo; hechos y circunstancias que la acrediten; inicio, término, remuneración, jornada, funciones.

2. En la afirmativa de la anterior, procedencia de ser nulo el despido, ser injustificado, hechos y circunstancias que así lo acrediten.

3. Procedencia de las indemnizaciones y prestaciones reclamadas; Hechos y circunstancias que así lo acreditan.

Séptimo: Que a fin de acreditar sus pretensiones, la demandante rindió la siguiente prueba documental: 1. Contrato de prestación de servicios a honorarios suscrito entre las partes, de fecha 2 de enero de 2018. 2. Contrato de prestación de servicios a honorarios suscrito entre las partes, de fecha 4 de abril de 2018. 3. Contrato de prestación de servicios a honorarios suscrito entre las partes, de fecha 3 de julio de 2018. 4. Contrato de prestación de servicios a honorarios suscrito



entre las partes, de fecha 2 de agosto de 2018. 5. Contrato de prestación de servicios a honorarios suscrito entre las partes, de fecha 4 de septiembre de 2018. 6. Contrato de prestación de servicios a honorarios suscrito entre las partes, de fecha 2 de octubre de 2018. 7. Contrato de prestación de servicios a honorarios suscrito entre las partes, de fecha 8 de noviembre de 2018. 8. Contrato de prestación de servicios a honorarios suscrito entre las partes, de fecha 3 de diciembre de 2018. 9. Contrato de prestación de servicios a honorarios suscrito entre las partes, de fecha 21 de enero de 2019. 10. Informe anual de boletas de honorarios electrónicas correspondientes al año 2017, y boleta de honorarios electrónica emitida por el actor con cargo a la demandada, número 10, del mismo año. 11. Informe anual de boletas de honorarios electrónicas correspondiente al año 2018, y boletas de honorarios electrónicas emitidas por el actor con cargo a la demandada, N° 13, 14, 17, 20,21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28, todas del mismo año. 12. Informe anual de boletas de honorarios electrónicas correspondientes al año 2019, y boleta de honorarios electrónica emitida por el actor con cargo a la demandada, número 30, del mismo año. 13. Control de asistencia a nombre del actor correspondiente al año 2018, meses correlativos de enero a diciembre.14. Control de asistencia a nombre del actor correspondiente a enero de 2019. 15. Informes de desempeño de contrato a honorarios a nombre del actor, correspondiente al año 2018, meses de enero, febrero, marzo, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. 16. Informe de desempeño de contrato a honorarios a nombre del actor, correspondiente al mes de enero del año 2019. 17. Solicitud de permiso feriado legal personal a honorarios, de fecha 27 de diciembre de 2018, a nombre del actor. 18. Correo electrónico de fecha 7 de agosto de 2018, enviado por Paula Collao Vergara con destino a delia.salinasalampa.cl, con copia al actor, bajo el asunto "Re: información". 19. Correo electrónico de fecha 2 de octubre de 2018, enviado por Paula Collao Vergara con destino a Jesús Pizarro con copia al actor, bajo el asunto "Re: Caso Beasain por recepción". 20. Correo electrónico de fecha 4 de octubre de 2018, enviado por el actor con destino a pcollao.vicloud.com bajo el asunto "Borrados DIDECO-MOVIC". 21. Correo electrónico de fecha 11 de octubre de 2018, enviado por Paula Collao Vergara con destino al actor, bajo el asunto "Cronograma de recepción proyecto Aires Nuevos y Ferias." 22. Correo electrónico de fecha 17 de octubre de 2018, enviado por Paula Collao Vergara con destino a Daniela Valdebenito con copia al actor, bajo el asunto "Remito adjunto check list". 23. Correo electrónico de fecha 29 de octubre de 2018, enviado por Paula Collao Vergara con destino a Marco Hurtado con copia al actor, bajo el asunto "urgente-cita a reunión de coordinación para martes 30/octubre/2018_rv: Solicitud Valle



Grande 22-10-2018.pdf". 24. Correo electrónico de fecha 28 de noviembre de 2018, enviado por Paula Collao con destino a Jocian Montenegro con copia al actor, bajo el asunto "RV: información y solicitud plaza comunitaria las Malvinas". 25. Correo electrónico de fecha 7 de enero de 2019, enviado por el actor con destino a pcollao.vaicloud.com, bajo el asunto "Solicitud de Información con fecha 03/01/19". 26. Correo electrónico de fecha 21 de enero de 2019, enviado por Paula Collao Vergara con destino al actor, bajo el asunto "Fwd: Solicitud de reunión Técnica proyectos sitio Propio". 27. Dos fotografías impresas a color donde figura al actor cumpliendo labores.

También obtuvo de la contraparte la exhibición de los siguientes documentos: 1.- Contratos de prestación de servicios suscritos entre las partes, correspondientes al período desde el 1 de octubre de 2018 hasta el 31 de octubre de 2018; 2.- Decretos emitidos por la Ilustre Municipalidad de Lampa donde se apruebe la contratación del actor por el período entre enero de 2018 y enero de 2019; 3.- Informes de gestión mensual del actor por los meses de abril de 2018 y febrero de 2019.

Luego, provocó la confesional de doña Graciela Ortuzar Novoa, quien no compareció a estrados, haciéndose efectivo el apercibimiento establecido en el artículo 454 N° 3 del Código del Trabajo, debiendo tenérsela por confesa de los hechos objeto de prueba consignados en la demanda.

Fianlmente, rindió la testimonial por la cual depusieron doña Paula Andrea Collao Vergara y doña Claudia Hidalgo Allende.

Finalmente, allegó al proceso el oficio evacuado por Fonasa relativo al estado de pago de cotizaciones previsionales del actor respecto al periodo que va desde el 1 de diciembre de 2017 hasta el 4 de febrero de 2019.

Octavo: Que, a su turno, la demandada no rindió probanzas.

Noveno: Que el inciso 2° del artículo 1° de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de las Municipalidades, establece que éstas son corporaciones autónomas de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de las respectivas comunas.

Que, asimismo, en dicha ley se establece que el Alcalde, dentro de sus atribuciones, representa judicial y extrajudicialmente a la Municipalidad, con facultad para nombrar y remover a los funcionarios de su dependencia de acuerdo a las normas estatutarias que los rijan. Y en su artículo 3°, se prescribe que son funciones privativas de dichas entidades, “a) Elaborar, aprobar y modificar el plan



comunal de desarrollo cuya aplicación deberá armonizar con los planes regionales y nacionales; b) La planificación y regulación de la comuna y la confección del plan regulador comunal, de acuerdo con las normas legales vigentes; c) La promoción del desarrollo comunitario; d) Aplicar las disposiciones sobre transporte y tránsito públicos, dentro de la comuna, en la forma que determinen las leyes y las normas técnicas de carácter general que dicte el ministerio respectivo; e) Aplicar las disposiciones sobre construcción y urbanización, en la forma que determinen las leyes, sujetándose a las normas técnicas de carácter general que dicte el ministerio respectivo, y f) El aseo y ornato de la comuna” ; señalando en su artículo 4° las funciones a desarrollar relacionadas con la educación y la cultura; la salud pública y la protección del medio ambiente; la asistencia social y jurídica; la capacitación, la promoción del empleo y el fomento productivo; el turismo, el deporte y la recreación; la urbanización y la vialidad urbana y rural; la construcción de viviendas sociales e infraestructuras sanitarias; el transporte y tránsito públicos; la prevención de riesgos y la prestación de auxilio en situaciones de emergencia o catástrofes; el desarrollo, implementación, evaluación, promoción, capacitación y apoyo de acciones de prevención social y situacional, la celebración de convenios con otras entidades públicas para la aplicación de planes de reinserción social y de asistencia a víctimas, así como también la adopción de medidas en el ámbito de la seguridad pública a nivel comunal, sin perjuicio de las funciones del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y de las Fuerzas de Orden y Seguridad; la promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y el desarrollo de actividades de interés común en el ámbito local; y en su artículo 23 se indican las funciones de la unidad de servicios de salud, educación y demás incorporados a la gestión municipal, entre ellas proponer y ejecutar medidas tendientes a materializar acciones y programas relacionados con salud pública, entre otros. Además, en el artículo 8° de la referida ley orgánica, se señala que para el cumplimiento de sus funciones, las municipalidades podrán celebrar convenios con otros órganos de la Administración del Estado en las condiciones que señale la ley respectiva, sin alterar las atribuciones y funciones que corresponden a los municipios.

Que, siguiendo el análisis de la Ley 18.695, su artículo 40 prescribe, a propósito del personal de las municipalidades, que: “El Estatuto Administrativo de los Funcionarios Municipales regulará la carrera funcionaria y considerará principalmente el ingreso, los deberes y derechos, la responsabilidad administrativa y la cesación de funciones” , estatuto que se contiene en la Ley 18.883, que en su artículo 1° dispone que “ El estatuto administrativo de los funcionarios municipales se aplicará al personal nombrado en un cargo de las plantas de las municipalidades...” , “...Los funcionarios a contrata estarán sujetos a esta ley en



todo aquello que sea compatible con la naturaleza de estos cargos” ; el artículo 2° señala cuáles son los cargos de planta y cuales los de contrata; el artículo 3° , en su inciso 1° establece que quedarán sujetas a las normas del Código del Trabajo, las actividades que se efectúen en forma transitoria en municipalidades que cuenten con balnearios u otros sectores turísticos o de recreación; su artículo 4° , trata de la contratación a honorarios, y establece: “Podrán contratarse sobre la base de honorarios a profesionales y técnicos de educación superior o expertos en determinadas materias, cuando deban realizarse labores accidentales y que no sean las habituales de la municipalidad; mediante decreto del alcalde. Del mismo modo se podrá contratar, sobre la base de honorarios, a extranjeros que posean título correspondiente a la especialidad que se requiera.

Además, se podrá contratar sobre la base de honorarios, la prestación de servicios para cometidos específicos, conforme a las normas generales.

Las personas contratadas a honorarios se regirán por las reglas que establezca el respectivo contrato y no les serán aplicables las disposiciones de este Estatuto” .

Décimo: Que además, el artículo 1° del Código del Trabajo señala en su inciso 1° que las relaciones laborales entre empleadores y trabajadores se regularán por dicho cuerpo legal y sus leyes complementarias, estableciendo una excepción en su inciso 2° al disponer que tales normas no se aplicarán a los funcionarios de la Administración del Estado, centralizada o descentralizada, siempre que dichos funcionarios se encuentren sometidos por ley a un estatuto especial. Y en su inciso 3° se establece una contra excepción al señalar que los trabajadores de tales entidades se sujetarán a las normas del código del trabajo en los aspectos o materias no regulados en sus respectivos estatutos, siempre que ellos no fueren contrarios a estos últimos.

Finalmente, se tendrá presente que el artículo 7° del Código del Trabajo prescribe "Contrato individual de trabajo es una convención por la cual el empleador y el trabajador se obligan recíprocamente, éste a prestar servicios personales bajo dependencia y subordinación del primero, y aquél a pagar por estos servicios una remuneración determinada."

Décimo primero: Que en relación con el primer hecho a dilucidar, relativo a la “efectividad de estar en presencia de una relación laboral en los términos que regula el artículo 7 del Código del Trabajo; hechos y circunstancias que la acrediten; inicio, término, remuneración, jornada, funciones” , cabe señalar que de las normas transcritas aparece que cuando los funcionarios de la



Administración del Estado, sea centralizada o descentraliza, están sometidos por ley a un estatuto especial, no les son aplicable las normas del Código Laboral y leyes complementarias y, en el caso de los funcionarios municipales, están sometidos a un estatuto especial a través de la Ley 18.883, el cual permite la contratación a honorarios, en cuyo caso su regulación es la que está contenida por las cláusulas del propio contrato y, en su defecto, por el Código Civil, como aparece del artículo 4º de dicho Estatuto, que da cuenta que las municipalidades pueden contratar personas naturales bajo la figura del contrato a honorarios, en dos supuestos, uno, cuando se trate de labores accidentales y no habituales de la misma municipalidad; dos, para la prestación de servicios sobre cometidos específicos.

Décimo segundo: Que en el caso de autos, conforme consta de los contratos de prestación de servicios celebrados entre las partes entre el 2 de enero de 2018 y el 21 de enero de 2019, boletas de honorarios desde diciembre de 2017 a enero de 2019, de los informes de desempeño de enero de 2018 a enero de 2019 y de los decretos alcaldicios que los refrendan, de 2 de enero de 2017 a 21 de enero de 2018, aparece que el demandante al ser contratado a honorarios por la demandada, lo fue respecto de un cometido específico, sujeto a la planificación anual llevada a efecto por la Ilustre Municipalidad de Lampa en concomitancia con la Dirección de Obras, como parte del programa de “Atención de Público Dirección de Obras 2018”, aprobado por Decreto Exento N° 02, de 2 de enero de 2018, como parte integrante de los Programas Comunitarios del Área de Gestión, debiendo ejecutar la tarea de arquitecto revisor de la referida dirección.

Que, en efecto, de la documental ya analizada, aparece claramente que el demandante desarrollaba un cometido específico para la demandada, relacionado estrechamente con su formación profesional y académica como arquitecto, puesto que todas las funciones detalladas tanto en su contrato como en su informe de desempeño así lo muestran, cometido que no solo atiende al tiempo total que desarrolló tal función –un poco más de un año-, sino que principalmente al programa del municipio en cuyo contexto se ejercían las funciones que el propio programa establecía, todas relacionadas con la revisión de expedientes de la referida dirección de obras y con la atención de público, tanto en dependencias de la demandada como en terreno, sin que se acreditase la ejecución de otras funciones que fueran ajenas a los conocimientos que detenta el demandante.

Décimo tercero: Que, aun cuando conforme las declaraciones de los testigos, la demandante cumplía horarios, puesto que tanto Paula Andrea Collao Vergara, jefatura directa, como Claudia Hidalgo Allende, compañera de trabajo, señalaron de manera conteste que veían a diario al actor en las oficinas de la



Municipalidad, y que su jornada diaria se consignaba en un libro de asistencia llevado al efecto, lo cierto es que consta de los libros de asistencia que se incorporaron al juicio que su concurrencia a las dependencias de la demandada se ejecutaba de modo irregular, a veces tres días a la semana, a veces siete días, aun cuando ello ocurría con un patrón horario bastante constante en cuanto a la hora de entrada y salida.

Que, asimismo, aún cuando ambas testigos plantearon que el demandante seguía las instrucciones que impartía la jefatura a través de memos y mensajería de whatsapp, ninguna de estas comunicaciones fueron allegadas al proceso, acompañándose únicamente un total de nueve correos electrónicos de diversas fechas entre el 7 de agosto de 2018 y el 21 de enero de 2019, la mayoría remitidos por Paula Andrea Collao Vergara a diversas casillas de correo, entregando o recibiendo información de esos destinatarios, y copiando dichas comunicaciones al demandante, por lo que no pueden sino estimarse como meros lineamientos generales en cuanto a la forma en cómo debían prestarse los servicios contratados, mas no instrucciones directas de jefatura.

Que finalmente, tanto de los contratos de prestación de servicios, como de la solicitud de feriado, y de las declaraciones de las testigos, ha resultado acreditado que el demandante gozaba de ciertos beneficios tales como feriados, licencias médicas y aguinaldos, como también que la demandada era quien proporcionaba al demandante los materiales de trabajo necesarios y acordes para el desempeño de la función realizada, elementos que resultan insuficientes, a la luz de lo ya razonado anteriormente, para estimar indubitadamente que la relación existente entre las partes debía regularse por el artículo 7° del Código del Trabajo.

Décimo cuarto: Que a mayor abundamiento, debe tenerse presente que la contratación efectuada por las municipalidades está regulada tanto en su ley orgánica como en el estatuto administrativo para funcionarios municipales, en el cual se indica que la contratación a honorarios, en los supuestos del artículo 4° de dicho estatuto, se rige por las reglas que se establezcan en el respectivo contrato, y en el presente caso, en los contratos a honorarios acompañados al proceso están reguladas cada una de las situaciones antes referidas, y ello es así por la situación especial que se da en este tipo de organización, que es una corporación autónoma de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, encargada de la administración local de la comuna, cuyos fines y atribuciones están determinados por ley.

Décimo quinto: Que así las cosas y por lo ya razonado en los motivos que preceden, es que no se ha logrado convicción respecto a que los servicios del



actor se ejecutaron en los términos del artículo 7° del Código Laboral sino que los mismos se desarrollaron bajo el marco regulatorio fijado en el artículo 4° de la Ley 18.883, ya citada, en cuanto tal disposición habilita al órgano de la administración del Estado a contratar a honorarios cuando se trata de un “cometido específico” como es el programa de “Atención de Público Dirección de Obras 2018”, y por ende, legitima plenamente tal situación, no sólo por la normativa regulatoria que la establece sino por los hechos que la configuran en el presente caso.

Décimo sexto: Que al no haberse establecido la existencia de una relación laboral bajo un vínculo de subordinación y dependencia, presupuesto fáctico imprescindible para lo peticionado en la demanda respecto a indemnizaciones por despido indirecto, nulidad del despido y otros cobros, deberá necesariamente rechazarse la demanda.

Décimo séptimo: Que, la prueba ha sido valorada de acuerdo a las reglas de la sana crítica, analizándose todos los antecedentes incorporados, de manera que los no analizados expresamente, en nada alteran lo resuelto por ser sobreabundantes y reiterativos, ni aún la confesional de la demandada, por cuanto si bien se hizo efectivo el apercibimiento dispuesto en el artículo 454 N° 3 del código del ramo, lo cierto es que éste únicamente alcanza a los hechos que se invocan en el libelo, pero no a la interpretación del ordenamiento jurídico ni a las cuestiones de derecho en que se fundan las alegaciones del actor, las que son privativas del juez y han determinado el rechazo de las pretensiones del demandante.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 1, 7, 420, 425, 427, 429, 456, 457, 458, 459, 460, 461 y 462 del Código del Trabajo; Leyes N° 18.883 y N° 18.695 se resuelve:

I.- Que se rechaza íntegramente la demanda interpuesta en autos.

II.- Que no se condena en costa a la demandante, por estimar que tuvo motivo plausible para litigar.

Devuélvase los documentos a la parte, a sola petición verbal a contar de esta fecha, por estar digitalizados en el Sistema Informático de Tramitación.

Regístrese, notifíquese y archívese los antecedentes en su oportunidad.

RIT O-231-2019

RUC 19- 4-0180822-4



Proveyó don(a) ANDREA TERESA COPPA HERMOSILLA, Juez Titular del Juzgado de Letras de Colina.

En Colina a dieciséis de agosto de dos mil diecinueve, se notificó por el estado diario la resolución precedente.



A contar del 07 de abril de 2019, la hora visualizada corresponde al horario de verano establecido en Chile Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar dos horas. Para más información consulte <http://www.horaoficial.cl>